

José María Aznar

TRAS EL 11 DE MARZO

El 11 de marzo de 2004 recibí la noticia de los atentados de Madrid a las siete y media de la mañana, nada más producirse la explosión de las bombas en la Estación de Atocha, en El Pozo y en Santa Eugenia. Inmediatamente comprendí la gravedad de lo sucedido. Fui entendiendo la auténtica dimensión de la tragedia prácticamente como los demás españoles, a medida que me iban llegando, atropelladamente y cada vez más dolorosas, las noticias de lo ocurrido.

La primera preocupación, así como la del Gobierno, fue la atención a las víctimas. Lo más importante en un momento como éste es salvar vidas, socorrer a los heridos, ayudar a las familias y a los amigos de los afectados a encontrar el rastro de las personas a las que quieren. Ésa es la primera prioridad a la que se debe atender. Quienes sufren un acto de terrorismo deben saber desde el primer momento que el Gobierno y todos los organismos y las instituciones del Estado están con ellos, los apoyan y los apoyarán siempre, sea cual sea el esfuerzo que sea necesario desplegar. Al mismo tiempo, el Gobierno tiene el deber de asegurar el restablecimiento

del orden y la recuperación e la normalidad, aunque sea relativa. Un atentado es siempre una derrota, pero demostrar que el terrorismo no es capaz de sembrar el miedo ni el desorden es empezar a recuperar terreno. Había que dejar claro que no nos dejábamos atemorizar y que la sociedad española está preparada para resistir cualquier ataque.

Siento una deuda personal de gratitud y reconocimiento ante todos los que en aquella mañana se esforzaron por socorrer a las víctimas y ayudar a las instituciones en su tarea. La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, la RENFE, las fuerzas de seguridad, los bomberos, los médicos y el personal sanitario, los trabajadores de FEMA, los empleados de limpieza, los taxistas, todos los que voluntariamente contribuyeron a aliviar el sufrimiento y restaurar el orden, todos ellos merecen mi más hondo respeto y mi más profundo agradecimiento. La Casa Real, como siempre, fue un ejemplo para todos nosotros.

Me siento orgulloso de vivir en una ciudad y de ser ciudadanos de un país que reaccionó como reaccionaron los madrileños, y todos los españoles, en aquellas horas trágicas. Fue un ejemplo, una lección y, sobre eso, un consuelo. Los terroristas habían sesgado cerca de doscientas vidas, herido a mil quinientas personas y golpeado en lo más íntimo, y para siempre, a sus familiares y a sus amigos. Pero la respuesta demostró también que la sociedad española, dolida como estaba, no está dispuesta a dejarse amedrentar por quienes quieren destruirla.

Al mismo tiempo que el Gobierno dispuso la atención a las víctimas y la

restauración, en lo posible, e la normalidad, se abrió la investigación sobre lo sucedido. Yo mismo y el Gobierno creímos que ETA era la autora material de los atentados. No fuimos los únicos ni en España ni fuera de España. No hubo ni un solo representante del Estado, ni un solo medio de comunicación que adelantara otra hipótesis en aquellos momentos. Lo sucedido

encajaba bien con los intentos de atentado frustrados por las Fuerzas de seguridad en los meses previos, como el de Nochebuena de 2003 o del mes de febrero, cuando se interceptó en Cuenca una furgoneta cargada de 500 kilos de dinamita. Como todos los que había intentado ETA en los últimos meses, el atentado del 11 de marzo tenía por escenario no una zona cualquiera de España, sino precisamente Madrid.

Después de la acción de Cuenca, hubo quien, en el Partido Socialista, puso en duda la acción antiterrorista del Gobierno y sugirió que la aprensión de aquella furgoneta cargada de 500 kilos de dinamita destinados a estallar en pleno centro de Madrid (el 1 de Marzo se utilizaron 100 kilos) era algo parecido a un montaje. No hay que olvidar algo que también estuvo presente en todo lo acaecido desde las primeras noticias de los atentados de Madrid. Y es que estábamos a punto de terminar la campaña electoral y a cuatro días de unas elecciones LA's encuestas habían venido dando por ganador al Partido Popular, y aunque estas especulaciones, más de una vez lo largo de aquella mañana pensé en el significado que se le querría dar, una vez pasadas las elecciones, a la posible influencia de los atentados en el resultado electora.

Sólo el tiempo sabe si llegaremos algún día a descifrar cuál fue esa influencia. Pero ya hemos aprendido una primera lección: que la violencia terrorista no puede ser utilizada con fines políticos o partidistas. Por motivos éticos, en primer lugar, pero también porque las sociedades democráticas y abiertas como lo es la española no admiten ni siquiera la sospecha de que el terrorismo pueda servir para otra cosa que no sea la reafirmación de los principios que sostienen la convivencia en paz y en libertad.

LA hipótesis de la autoría de ETA, unánimemente aceptada en un primer momento, se vio complementada por algunos indicios aportados por la investigación emprendida de forma inmediata. LA política antiterrorista del Gobierno, en estos ocho años en los que he ocupado la Presidencia, ha estado siempre condicionada por algunos principios irrenunciables: el respeto a la ley y el respeto a la verdad. Nunca he ocultado a mis compatriotas y a la opinión pública los objetivos de la acción antiterrorista ni los pasos que se estaban dando para ponerla en práctica. Por respeto a los españoles, por respeto a esta regla básica de nuestra política antiterrorista y por respeto a la democracia seguimos esta misma línea en cuanto supimos que habían aparecido indicios que apuntaban a algún grupo de fundamentalistas islámicos como autor de los atentados de Madrid.

El ministro del Interior, siguiendo mis indicaciones y su propio sentido del deber, los puso en conocimiento de la opinión pública. Lo hizo cuantas veces fue necesario y tan pronto se iba corroborando cualquier nuevo dato. Sólo puedo manifestar mi admiración y mi orgullo por la labor que realizaron en

muy poco tiempo, y que han seguido realizando después las Fuerzas de Seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia, con el descubrimiento, al análisis, el procesamiento y el seguimiento de las diversas líneas de investigación abiertas. Por razones que deberían ser evidentes para todo el mundo, el Gobierno no puede aventurar hipótesis ni especulaciones basadas en rumores. Su deber es dar a conocer hechos contrastados y las acciones que se derivan de éstos, como hicimos siempre que fue necesario y en el plazo más breve posible.

Respeto, como no podía ser menos, a todos quienes de buena fe se sintieron preocupados –y pueden sentirse aún hoy- ante la posibilidad de que el Gobierno, y yo mismo, mantuviéramos apartada del conocimiento del público algún tipo de información. Considero además que esta desconfianza es indicio de una sociedad madura, más consciente de su propia fortaleza de lo que algunos suponen. A estos ciudadanos les aseguro que así como siempre he dicho la verdad a la opinión pública en cuanto a la lucha antiterrorista, también el Gobierno mantuvo siempre al tanto a la opinión pública de la información que le iban suministrando las investigaciones en curso. La desclasificación de los documentos del Centro Nacional de Inteligencia

referidos a la investigación ha intentado responder a esa preocupación –legítima- por conocer la verdad. No se trataba de un simple gesto de exculpación. Tampoco eran documentos comprometedores para la albor que se ha venido realizando desde los atentados del 11 de marzo. Además, demuestran lo que ya he dicho: la profesionalidad y el buen hacer de los encargados de la seguridad.

Siempre he dicho, y lo he reiterado varias veces a lo largo de este libro, que el terrorismo no tiene justificación alguna, que resta cualquier legitimidad a la cusa que dice defender, y que todos los terrorismos deben ser combatidos de la misma manera: sin concesiones y sin ceder a su chantaje. Para mí, ETA y el terrorismo islámico merecen el mismo rechazo y la misma respuesta. Debo reconocer, sin embargo, que tal vez la opinión pública española no era lo suficientemente consciente, hasta el 11 de marzo, del alcance de la amenaza del terrorismo islámico, o por lo menos no tanto como lo ha sido de la amenaza del terrorismo de ETA. Si es así, el Gobierno tiene sin duda una responsabilidad que asumir. Quizás los propios éxitos conseguidos en la lucha contr ETA en los últimos años nos han llevado a bajar la guardia ante la amenaza fundamentalista. Y quizás hemos inducido a confusión acerca del posible papel que nos corresponde en la lucha contra el terrorismo, como si los españoles hubiéramos aceptado participar en ella a cambio de ayuda en la batalla que estamos llevando a cabo en nuestro territorio.

No he tenido nunca la intención de fomentar esa confusión, ni he querido alimentar un estado de espíritu que indujese a nadie, y menos aún a ningún compatriota, a desmovilizarse ante la amenaza fundamentalista. El 11 de

septiembre y las investigaciones que se han realizado desde entonces demuestran que las redes del terrorismo fundamentalista islámico están extendidas por todo el mundo, y también por Europa y por nuestro país. EN algunos casos hemos sido capaces de detectar sus movimientos a tiempo. El 11

de marzo, desgraciadamente, o supimos hacerlo. Los españoles, el resto de europeos y muy en particular los gobernantes y los dirigentes políticos debemos preguntarnos por qué esas redes terroristas han sido indetectables por los servicios de seguridad y que suerte de facilidad ofrecen nuestras sociedades a quienes se han propuesto destruirlas. En cualquier caso, también aquí hemos aprendido –a un precio altísimo, motivo de duelo para siempre- una lección que deberíamos haber sabido hace mucho tiempo: que en un mundo abierto como el nuestro ninguna frontera nos garantiza estar a salvo de un ataque.

El viernes 12 de marzo, apenas transcurrido el día y medio desde los atentados, más de once millones de personas salieron a las calles a manifestar su dolor, su solidaridad con las víctimas, su repulsa del terrorismo y su lealtad a la Constitución y a la democracia. Fue la mayor manifestación de condena al terrorismo que hemos visto en España y en toda Europa. Desde el asesinato de Miguel Ángel Blanco en julio de 1998, nunca tantas personas habían sentido la necesidad de reunirse para condenar sin ningún género de dudas, sin paliativo alguno, el crimen terrorista. En julio e 1998 la indignación de una nación entera y unida en el dolor demostró que el terrorismo podía ser vencido. La manifestación del 12 de marzo nos debe indicar lo mismo.

Así como hay que sacar muchas lecciones de lo ocurrido en esos días, también habrá que sacar las lecciones de esa expresión de indignación, de rechazo y de afirmación. Ahí expresó la misma España generosa y compasiva que hizo lo que tenía que hacer el 11 de marzo. No quedó ninguna duda de cuál es la actitud de nuestro país ante el terrorismo. Y ese espíritu habrá de ser preservado y aprovechado. Despejada la niebla del enfrentamiento político, quedará esa negativa radical, ese impulso de fondo nutrido en el respeto y el recuerdo del dolor de la víctimas, de sus familiares y de sus amigos. La manifestación del 12 de marzo debe ser una inspiración y una exigencia para todos. NO tenerlo en cuenta, hacer como que no existió, es un gesto e traición y de deslealtad.

El Gobierno salido de las elecciones del 14 de marzo tiene una especial responsabilidad en este sentido. A él corresponde expresar en gestos y en acciones lo que los españoles dijeron aquella tarde. Ese mismo Gobierno tiene una especial responsabilidad ante la verdad. A verdad fue invocada sin tregua en los días que mediaron entre el 11 de marzo y las elecciones del día 14. Mi Gobierno ha demostrado que dijo la verdad: la verdad sobre los datos que iban apareciendo la verdad sobre las líneas de investigación, la verdad sobre las hipótesis que se iban manejando a medida que avanzaba nuestro conocimiento de los hechos.

Hubo personas, en particular el jefe de campaña del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno español, llamado a ocupar un puesto tan alto

como el de jefe del grupo parlamentario del PSOE en la Cortes españolas, que dijo en los medios de comunicación, la noche del 13 al 14 de marzo, que el Gobierno estaba mintiendo. Una vez demostrada la falsedad de estas gravísimas acusaciones, estas personas, que violaron a sabiendas la ley electoral que les obligaba a abstenerse de cualquier manifestación política el día de la reflexión, tienen el deber de demostrar que esas acusaciones no entrañaban una interpretación conscientemente sesgada de una realidad que conocían a la perfección. Y si no lo logran demostrar y no actúan en consecuencia, la opinión pública sabrá lo que tiene que esperar de ellos. Los españoles, que han demostrado estos días una acusada sensibilidad ante cualquier sospecha de manipulación y de ocultación de los hechos, no se merecen otra cosa.

Tengo una plena confianza en la democracia de mi país. Los españoles conforman una sociedad madura y responsable. Le exigen a su Gobierno lo que se debe exigir a un gobierno en democracia: el respeto a la opinión pública, el respeto de la ley y el respeto al principio de transparencia y de verdad. NO tengo dudas acerca de la legitimidad del Gobierno español que salió de las elecciones del 14 de marzo. EL tiempo pondrá las cosas en su lugar, y como todos sabremos la verdad sobre lo ocurrido entre el 12 y el 14 de marzo, también sabremos quién actuó en consecuencia con la verdad.

Desde hoy mismo puedo decir dos cosas. Una, repetir que mi Gobierno se atuvo a la verdad que conocía. Y la segunda, que lo sucedido durante la jornada de reflexión del 13 de marzo merece la más firme repulsa de cualquier demócrata y de cualquier ciudadano respetuoso de la ley. Las manifestaciones ilegales, las vociferaciones ante las sedes del Partido Popular, los insultos al Gobierno de España, la campaña de difamación y de infamias quisieron empañar el espíritu cívico de la manifestación del día anterior. NO lo lograron entonces y no lo lograrán nunca.

No era la primera vez que mi partido y sus militantes se ven acosados por quienes le niegan cualquier legitimidad no ya para gobernar, ni siquiera para existir. Lo vimos en los hechos ocurridos en la manifestación del 12 de marzo en Barcelona, cuando se impidió que dos representantes del Partido Popular expresaran públicamente sus solidaridades con las víctimas. Son hechos que contradicen el espíritu de tolerancia que ha caracterizado hasta ahora la vida pública catalana. También lo vimos durante la campaña organizada contra el Partido Popular durante la Guerra de Iraq, cuando no se expresó sólo una disensión legítima ante las decisiones del Gobierno, sino que se quiso negar la legitimidad misma del Gobierno español. La misma noche del 13 de marzo, el candidato a la Presidencia del Gobierno por mi partido, Mariano Rajoy, denunció ante la opinión pública el acoso al que estaba siendo sometido su partido, su propia sede en Madrid, y la flagrante violación de la ley en la que estaban incurriendo los que perpetraron e instigaron aquel hostigamiento. Quienes tenían la obligación moral de respaldar esta condena no lo hicieron.

En vez de sumarse a ella para intentar calmar a una opinión pública alarmada por la gravedad de lo que estaba ocurriendo, prefirieron servir de portavoz a la calumnias que se estaban profirieron en la calle y en algunos medios de comunicación. Confío en que hechos como éstos no se vuelvan a repetir. Son indignos del pueblo español, de los veinticinco años de democracia que hemos construido entre todos, del talante de diálogo y de tolerancia que ha presidido la historia reciente de nuestro país. Lo ocurrido esos días demuestra que muchos de aquellos que recurren con extrema facilidad a palabras tan serias como diálogo y tolerancia no las ponen tan fácilmente en práctica cuando les toca a ellos ejercerlas. No son, efectivamente, preceptos fáciles de cumplir. Pero la indignidad de esta actitud es aún mayor si se tiene en cuenta que los atentados del 11 de marzo nos convocaban a todos a la unidad contra el terrorismo, fundada en el respeto a las víctimas recientes.

El día 13 de marzo se quiso resucitar una España de enfrentamientos civiles entre compatriotas. No lo consiguieron esos días, ni lo conseguirán ahora. La España en la que yo vivo, los nueve millones y medio de votantes que respaldaron al Partido Popular el 14 de marzo, no van a consentir ese salto atrás en el tiempo. Estoy seguro que tampoco es ése el espíritu que inspira a la inmensa mayoría de quienes votaron otras opciones políticas. El Gobierno surgido de esas elecciones cometerá un grave error si cree que sobre lo que se manifestó el día 13 de marzo en algunas calles y en algunos medios de comunicación se puede fundar una política democrática y nacional.

En los últimos años, España ha ido asumiendo compromisos internacionales cada vez más importantes. Se incorporó a la Unión Europea, que era su espacio geográfico y político natural, se incorporó a la Alianza Atlántica, asumiendo así sus responsabilidades en la defensa de los valores de la cultura occidental, y ha participado en diversas misiones militares y de pacificación. Unas veces, como en Afganistán en 2002, lo ha hecho bajo mandato de la ONU. Otras lo ha hecho sin mandato expreso de la ONU, como en Bosnia entre 1992 y 1993, bajo un Gobierno presidido por un líder del Partido Socialista. Aun así, en todos los casos esta participación respondía a un amplio consenso internacional acerca de las amenazas a las que se intentaba responder.

En el caso del régimen iraquí derribado por las tropas angloamericanas en marzo de 2003, la intervención respondió a la convicción generalizada de que aquel régimen constituía una amenaza para sus vecinos y para los países occidentales. También se tenía la certeza, compartida por toda la comunidad internacional, de que el anterior régimen iraquí no había facilitado las inspecciones de la ONU ni iba a facilitarlas en el futuro. No sabemos qué fue de las armas de destrucción masiva del anterior régimen de Bagdad. Sabemos con toda certeza que las tuvo: lo demostró en la guerra que le declaró a su vecino Irán y las utilizó para masacrar a su propio pueblo, en particular a decenas de miles de Kurdos y de chiíes. Y sabíamos, y sabemos –quien dice lo contrario falta a la verdad- que Sadam Hussein nunca demostró que había abandonado el designio de fanes de la ONU que ampararon a la coalición de países que apoyaron la intervención en Iraq.

España no participó en aquella guerra, aunque sí apoyó a los aliados que se enfrentaron a la amenaza que suponía entonces el régimen iraquí. En cambio, España sí se ha comprometido activamente, con 1300 soldados, en la salvaguardia del orden y en la construcción de un régimen civilizado, tolerante y respetuoso con los derechos humanos en Iraq.

Una de las grandes novedades de orden internacional surgido tras la caída del Muro de Berlín y los atentados del 11 de septiembre reside justamente en que nos obligan a nuevos compromisos. Lo he dicho en un capítulo anterior de este mismo libro y lo vuelvo a repetir ahora. Ya no nos enfrentamos, como durante la Guerra Fría, a unos ejércitos regulares que respetaban principios como los de la inviolabilidad de las fronteras y el respeto a la población civil. El enemigo al que nos enfrentamos no respeta fronteras, ni la población civil puede sentirse a salvo ante él. Los ataques el 11 de septiembre, perpetrados en Iraq mismo después de la caída de Sadam Hussein, muchos de ellos dirigidos contra la población civil iraquí y alguno, particularmente sangriento, contra el personal de la ONU, los atentados en Estambul, Bali y Casablanca, y los de Madrid del 11 de marzo lo demuestran sobradamente.

La respuesta a esta amenaza requiere un compromiso claro y firme de no ceder al chantaje. Me referiré a esto después. También requiere, por parte de las democracias desarrolladas, y prósperas, otro tipo de compromiso: el de contribuir a asentar en estos países condiciones de vida que permitan erradicar el fanatismo y la canalización de la violencia. Los países libres – y ricos – tenemos que contribuir activamente a que los regímenes de los países donde han surgido movimientos terroristas, muchos de ellos países islámicos, tomen las medidas encaminadas a que sus poblaciones puedan llevar una vida digna, decente y libre. No es imposible, como lo demuestra la instauración de la democracia en países de tradición no occidental. Pero es una tarea ardua, sacrificada, y de muy largo plazo.

A ella están contribuyendo nuestras tropas en Iraq. Hay en España quien no tiene rubor en afirmar que nuestros soldados están participando en una misión de ocupación y son por tanto tropas de ocupación, que están sojuzgando e impidiendo el ejercicio de soberanía de un país libre. No es así. Iraq no era un país libre bajo Sadam Hussein. Hoy no lo es aún, pero no lo es está sometido a una brutal ola de terrorismo, que también nos ha alcanzado a tres mil personas en Nueva York y en Washington el 11 de septiembre, mucho antes de la intervención de los aliados en Iraq.

Nuestras tropas están en Iraq para ayudar a restaurar el orden y para salvar vidas, como lo hicieron las fuerzas de seguridad y los ciudadanos madrileños el 11 de marzo. Están en Iraq para preparar y construir infraestructuras, y para sostener a la autoridad que ha consensuado una Constitución para todos los iraquíes. Los iraquíes necesitan nuestro compromiso. Nos lo han hecho saber en múltiples ocasiones. No quieren que las tropas españolas abandonen Iraq.

Decisiones como la anunciada por el líder del PSOE inmediatamente después de las elecciones, sin esperar siquiera a una consulta con la ONU y nuestros aliados internacionales, puede poner en peligro esta misión y los progresos que se han hecho desde que se terminó la guerra.

España ha sido uno de los países más activos en la lucha que las democracias mantienen contra el terrorismo. Debería seguir siéndolo. No

debemos dejar la defensa de las libertades de las que hoy disfrutamos en manos de Estados Unidos o de Gran Bretaña y desentendernos del compromiso de estos dos aliados en nuestra propia defensa. No podemos convertirnos en países que dependan íntegramente, para su seguridad exterior e interior, de las decisiones que se toman en Washington o en Londres. Tenemos que ser capaces de influir en esas decisiones, que nos afectarán cada vez más.

Los españoles teníamos hasta el 11 de marzo una dura experiencia de lo que significa la violencia terrorista. Hoy lo sabemos aún más. El terrorismo va a seguir golpeando allí donde pueda hacerlo. Entre sus víctimas se cuentan personas de muy diversas nacionalidades, tanto en Nueva York, en Bali, en Mombasa, en Casablanca, en Estambul, en Kerbala y en Madrid, donde han muerto personas de muy diversos países: de Brasil, Bulgaria, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, Filipinas, Francia, Guinea Bissau, Honduras, Marruecos, Perú, Polonia, República Dominicana, Rumanía y Ucrania. El 12 de marzo de 2004 el Gobierno les concedió la nacionalidad española como un gesto de agradecimiento, y para honrar su memoria.

Nadie está a salvo del terrorismo. Nadie debe considerarse a salvo de la acción del terror. Este mismo año, un ingeniero alemán y otro holandés han sido asesinados en Iraq por cometer el crimen de tender cañerías de agua potable. Los terroristas han amenazado a Francia después de que el Parlamento francés restringiera el uso de símbolos religiosos en las escuelas. El terrorismo islámico ya ha actuado en Europa, y después del 11 de marzo, intensificará su acción si emitimos un signo de debilidad.

Nos encontramos en una lucha entre la libertad, la democracia y la civilización por una parte, y el terror, el fanatismo y el totalitarismo, por otra. El 11 de marzo todos nos sentimos madrileños y el mundo entero supo que era español. También vio cómo los españoles saben hacer frente con serenidad y con coraje a la adversidad. Tenemos que mantener este espíritu. No podemos abandonar el frente. Es una lucha que nos compromete a todos.

A lo largo de toda mi vida política, y en especial durante los ocho años en los que he sido presidente de Gobierno, he dicho que el terrorismo no es un fenómeno local, que no está restringido a una zona o a un país, y que no puede ser combatido con medios aislados. Muy al contrario, el terrorismo es un fenómeno global y no conoce fronteras. Y gana fuerza si pensamos que es un problema ajeno, y que la lucha contra él es responsabilidad de los demás.

Las discusiones sobre la autoría de los atentados de Madrid son muy importantes, porque es de gran relevancia conocer quién estuvo detrás de los ataques. Pero cualquier terrorismo es portador de una amenaza idéntica. Todos los atentados terroristas manifiestan el mismo odio a la libertad, la democracia y la dignidad humana. Quienes recurren al terror para conseguir sus fines son aliados naturales, y su fuerza se nutre de la herida que abre cualquier atentado, sea cual sea su autor material.

Antes del 11 de septiembre, todos los gobiernos españoles, incluidos los que nos precedieron, se esforzaron por demostrar al mundo civilizado que el terrorismo no era un fenómeno aislado y que la lucha contra él no debe recaer sólo en sus víctimas. Tras la destrucción de las Torres Gemelas, se empezaron a echar los cimientos para una nueva actitud ante el terrorismo, una actitud que respondía por fin a la posición mantenida en todos los foros internacionales por todos los gobiernos españoles.

ETA o Al Qaeda: la diferencia no es irrelevante, pero la respuesta a lo ocurrido debe ser la misma: firmeza, unidad política y cooperación internacional. Todos los demócratas viajaban en los trenes de cercanía madrileños el 11 de marzo. Fue un ataque contra todos nosotros, contra todo aquello en lo que creemos, contra todo aquello que hemos construido juntos.

Por esa razón no debemos enviar mensajes confusos, mensajes que inducirán a creer que hemos hecho concesiones a quienes nos están pidiendo que nos arrodillemos y pidamos perdón por vivir en democracia y en libertad y por haber creado sociedades prósperas. No es el momento de retirar las tropas españolas de Iraq. Y mucho menos lo es ahora, cuando los terroristas, con su mensaje de muerte y de destrucción, nos han dicho que debemos rendirnos.

En estos años nos hemos negado a rendirnos ante el terrorismo de ETA y sabemos las consecuencias que hubiera tenido un gesto de esa naturaleza. La retirada de las tropas españolas en Iraq será interpretada en los mismos términos: como un signo de debilidad. Probablemente no pretenda serlo, pero no hay que engañarse. Si eso llega a suceder, los terroristas estarán convencidos de que han logrado influir en la posición de España en la lucha contra el terrorismo y se reafirmarán en la convicción de que han logrado variar la naturaleza de la alianza internacional que lucha contra ellos. Las consecuencias de esta acción pueden ser sumamente graves. Retirarse de Iraq en estas circunstancias sentará un precedente peligroso. Los terroristas creerán que han conseguido imponernos sus condiciones. Les llevará a creer que han ganado.

La nueva posición de España en la escena internacional es el resultado de las políticas emprendidas en nuestra acción internacional. Pero el aumento de nuestra influencia en el mundo no debe ser considerado como un fin en sí mismo. Es un medio para mejor servir a los intereses de la Nación y atender así las necesidades concretas de los ciudadanos. Los valores y principios que han guiado la acción exterior de España se derivan de los ejes de la política interior del Gobierno: la defensa de las libertades y la lucha contra el terrorismo; la proyección de nuestra lengua y nuestra cultura, una cultura constitucionalmente plural; la apertura de nuestra economía y el fomento de la liberalización; la contribución a I desarrollo defendiendo la dignidad del hombre.

En los ocho años en los que he tenido el honor de estar al frente del Gobierno de mi país, hemos andado un buen trecho del camino que propusimos recorrer a todos los españoles en 1996. Creo poder decir, con el aval de los resultados, que los ciudadanos tienen hoy en España más bienestar, más oportunidades, más libertad.

Estos avances no habrían sido posibles si no hubiéramos creado una base firme y estable par la prosperidad. Será decisión de todos los españoles continuar construyendo sobre ella o desandar el camino y empezar a dismantelarla piedra a piedra, reforma a reforma. Nuestro futuro no está escrito. De las decisiones que a partir de ahora tomemos los españoles –todos y cada uno de nosotros- dependerá que sigamos avanzando por la senda de la estabilidad económica e institucional. O, por el contrario, que empecemos q retroceder.

Muchas veces tendemos a creer que las cosas que van bien no pueden torcerse, que el progreso no admite vuelta atrás, que la prosperidad de hoy no puede desaparecer mañana. Sin embargo, la historia, y también la historia de nuestro país, está llena de ejemplos de que eso no esa así.

España está hoy, en 2004, en condiciones de alcanzar en muy pocos años el nivel de vida y el nivel de prestigio de las grandes naciones del mundo. Esa oportunidad histórica puede ser desperdiciada si no se sostienen políticas económicas consistentes, que han demostrado su eficacia, y que están basadas en la austeridad, la contención en el gasto del Estado, la confianza en la iniciativa y en la libertad de los individuos, y en el respeto a la palabra dada y a la ley.

También estará en peligro si nos enredamos en discusiones sobre el modelo de Estado, discusiones que –estoy convencido– interesan menos a la inmensa mayoría de los ciudadanos que a una minoría de políticos más preocupados por el poder que por la sociedad. El progreso de España en los últimos veinticinco años se ha basado en la estabilidad que ha proporcionado el marco institucional de la Constitución pactada y consensuada en 1978.

Hoy el diseño del Estado trazado en sus grandes líneas por la Constitución de 1978 ya es una realidad. Entre todos hemos terminado de construir un modelo de Estado consistente con la naturaleza de nuestra nación: una administración descentralizada, próxima a los ciudadanos, capaz de dar respuestas a sus problemas y encauzar una rica pluralidad cultural y lingüística.

Ahora podemos elegir dos caminos: reforzar y consolidar este modelo para permitir que continúe el despegue de nuestra economía y con él unas mayores cuotas de bienestar y prosperidad para todos. O ponerlo en cuestión, volver a abrir el debate constitucional y replantear un problema de diseño territorial. La apertura de este proceso es jugar con el futuro de todos. Traerá consecuencias en la posición internacional de España, porque creará un clima de desconfianza, en particular de desconfianza económica que dificultará las inversiones extranjeras y nuestro crecimiento. Nos debilitará en el exterior, antes nuestros aliados y ante quienes irrumpieron el 11 de marzo en la campaña electoral. También traerá consecuencias en el interior, porque en vez de centrarnos en lo que el sentido común y la experiencia nos aconsejan, que es continuar en la tarea de alcanzar una mayor prosperidad y una mayor cohesión, nos veremos abocados a discusiones estériles, propias del pasado, y que nos harán retroceder en todos los campos, incluso en el de la historia.

Los españoles saben dónde me encontrarán a mí y a mi partido, el Partido Popular. Toda mi vida me he esforzado por cumplir los compromisos que he adquirido. Nos comprometimos a estar entre las primera naciones europeas, y estamos en trece de conseguirlo. Nos comprometimos a aumentar la prosperidad de nuestros conciudadanos y lo hemos hecho. Nos comprometimos a terminar el diseño de un Estado para una España plural, abierta y solidaria. También lo hemos hecho. Yo mismo me comprometí a dejar la Presidencia del Gobierno a los ocho años de haberla ocupado. También lo he hecho.

No pretendo que todo el mundo participe de mis convicciones personales y políticas. La política de estos últimos ocho años no ha buscado la unanimidad ni el aplauso. Pero ha estado guiada por un profundo respeto a la palabra dada, a la dignidad personal y a la verdad. Decir la verdad no es un ejercicio fácil. Yo me he esforzado por decirla siempre. A los largo de toda mi carrera política, cuando he ocupado la Presidencia del Gobierno de España, y al final, en la medida en que creía saberla, cuando la tragedia nos sobrecogió a todos con su rostro más atroz.

Habiéndolo hecho en circunstancias tan difíciles, no voy a dejar de decir la verdad ahora, cuando mis responsabilidades son menores y el Partido Popular, por una decisión legítima de los ciudadanos españoles, ha pasado a la oposición. Al revés. Me reafirmo en el mismo compromiso: decir lo que yo creo que es la verdad siempre que los considere necesario. El Partido Popular hará lo mismo. Quien lo dude, se equivoca. Será una de las formas en que contribuiremos a presentar a nuestros compatriotas una alternativa de gobierno seria y fiable, como seria y fiable ha sido la política de estos últimos ocho años.